

# AGENDA GLOBAL

Montevideo Uruguay - Jueves 24 de abril 2008 - N° 48 - Distribuido con *la diaria*



**TWN**  
Third World Network

- La "parapolítica" en Colombia
- Estados Unidos, salud y propiedad intelectual
- El sistema agrícola debe ser revisado



Si fuera cierto que es noticia cuando un hombre muerde a un perro, y no al revés, la reunión del enigmáticamente llamado "Grupo Piloto sobre las Contribuciones de Solidaridad en favor del Desarrollo" que terminó ayer en Dakar debería estar en la primera plana de todos los diarios.

Como a menudo sucede en reuniones internacionales, la cita de los gobiernos estuvo precedida por un encuentro de organizaciones ciudadanas y los diplomáticos fueron acosados por representantes de sindicatos, grupos de base, de mujeres, de defensa de los derechos humanos y de combate a la pobreza. Sólo que esta vez el reclamo popular que escucharon los gobiernos fue: "¡Queremos impuestos!"

Y cuantos más, mejor. Tan entusiastas se mostraron las organizaciones populares que la reunión de consulta organizada por la Commonwealth Foundation, el Instituto Norte-Sur de Canadá, Social Watch y el Consejo de ONG senegalés publica en su comunicado final una lista con ideas de nuevos impuestos que los gobiernos deberían aplicarnos a los ciudadanos: a las transacciones financieras, a las emisiones de carbón, a los viajes en avión y hasta al uso de computadoras.

Estos dos últimos ya existen, si bien en la jerga oficial no se los denomina impuestos sino "fuentes innovadoras de financiamiento". El Fondo de Solidaridad Digital fue creado por la Cumbre de la Sociedad de la Información en Túnez en 2005 y consiste en contribuciones voluntarias de la industria informática, uno de los grandes beneficiarios de la globalización, a un fondo destinado a promover la expansión de las nuevas tecnologías e Internet en los países más pobres. El impuesto a los viajes en avión, de un euro para los vuelos internacionales comunes y cinco para los de clase ejecutiva, ya se cobra en Francia y está en vías de implantarse en otros países. Sus recaudaciones financian a UNTAID, un fondo especial de las Naciones Unidas destinado a comprar vacunas para niños y medicamentos para adultos pobres en los países menos desarrollados.

Muchas vidas se han salvado ya gracias a este primer mal llamado "impuesto global", que es una tasa

## ¡Queremos impuestos!

Roberto Bissio

adicional que se cobra junto con la de uso de los aeropuertos y cuya recaudación, implementación y control es estrictamente nacional, aunque lo producido se destina sí a un fondo bajo control de las Naciones Unidas. Ya son más de cincuenta los países miembros del "Grupo Piloto" que con tanto beneplácito de la sociedad civil estudia la posibilidad de extender esta tasa y crear otras.

Cuando en el año 2000 los gobernantes del mundo se comprometieron solemnemente a metas concretas de erradicación de la pobreza a alcanzar en 2015 –los llamados "Objetivos del Milenio"–, la primera pregunta fue: "¿Eso cuánto cuesta?". Y la segunda: "¿Quién paga?". En los años siguientes el costo de los objetivos fue estimado por un equipo encabezado por el economista Jeffrey Sachs en un monto adicional de cien mil millones de dólares anuales a ser gastados principalmente en educación, salud y provisión de agua potable. Esta suma debería alcanzarse fundamentalmente duplicando la ayuda a los países más pobres. Estados Unidos vetó la idea de introducir en la resolución cualquier mención a impuestos globales sobre las emisiones de carbón o las transacciones financieras, y amenazó con retirar sus contribuciones de cualquier organismo de las Naciones Unidas que osara siquiera mencionar en un documento oficial las palabras "impuestos globales".

En respuesta, los presidentes Lula (Brasil) y Jacques Chirac (Francia), apoyados luego por José Luis Rodríguez Zapatero (España), Gerhard Schroeder (Alemania) y Ricardo Lagos (Chile), crearon el Grupo Piloto y resolvieron aplicar por su cuenta impuestos para los que no se precisa consenso universal sino sólo decisión política y compromiso locales. Si bien estos "mecanismos innovadores" han producido hasta ahora apenas mil millones de dólares –algo menos de uno por ciento de lo que se

necesitaría para cumplir con las metas del milenio–, el efecto demostración es importante y el ejemplo cunde.

Los impuestos tienen varias ventajas sobre la ayuda. En primer lugar, son previsibles y no volátiles, mientras que la ayuda depende de decisiones a menudo caprichosas y poco confiables. Así, por ejemplo, la asistencia oficial al desarrollo medida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico bajó un ocho por ciento con relación al año anterior, cuando ya había caído en relación a 2005, año de los grandes conciertos "Live Aid" que lograron un circunstancial aumento de la caridad intergubernamental. Al ser impredecible, la ayuda se vuelve ineficaz, ya que el FMI no permite a los gobiernos aumentar sus "gastos recurrentes" –como por ejemplo contratar maestros o médicos– sobre la base de recursos tan erráticos.

Además, la ayuda suele estar condicionada a contratar consultores innecesarios del país donante o comprarle sus productos, en modalidades de "ayuda vinculada" que recortan en otro treinta por ciento su eficacia final. Y, finalmente, las condicionalidades políticas, invariablemente en el sentido de mayor liberalización económica, privatizaciones y apertura al comercio y las inversiones extranjeras, reducen el margen político de maniobra de los gobiernos para decidir sobre qué políticas les convienen más.

Las tasas o impuestos globales, en cambio, son seguras, previsibles, transparentes en su funcionamiento y no condicionadas políticamente.

Del impuesto a las emisiones de carbón se hablará mucho en los próximos tiempos en el contexto de las discusiones sobre el cambio climático. Ofrece un mecanismo mejor que el de la compra y venta de cuotas de emisión, y sus recaudos pueden cubrir los costos de adaptación y mitigación del calentamiento global.

Como solución a la pobreza del mundo, en cambio, la tasa sobre las transacciones en monedas parece ser la alternativa más promisoría. No se trata del impuesto de uno por ciento a las transacciones financieras propuesto hace varias décadas por el premio Nobel James Tobin para evitar la especulación, sino de una tasa de 0,005 por ciento (la mitad de un centésimo del uno por ciento) sobre las operaciones de cambio, que sería cobrada por los bancos centrales.

La compra-venta mundial de monedas es un negocio de ochocientos mil millones de dólares anuales, cincuenta veces más que el total del comercio mundial de bienes y servicios. Un impuesto tan pequeño sobre estas transacciones no sería casi notado por los operadores –a un centavo por cada doscientos dólares cambiados no va a desestimar el turismo ni las remesas de los migrantes, ya que los costos de la intermediación financiera sobre cada operación son muchísimo mayores–, es casi imposible de evadir en un mercado totalmente digitalizado y ya supervisado para evitar la financiación del terrorismo. Además, no requiere, al igual que el impuesto piloto sobre los pasajes de avión, de una decisión internacional, ya que puede ser aplicado en cualquier momento por las autoridades monetarias de cada país.

Aplicada sobre las operaciones en libras esterlinas, por ejemplo, esta tasa generaría 3.500 millones de dólares al año, que se destinarían a aliviar la pobreza en el mundo. Según la baronesa Shirley Williams, miembro de la Cámara de los Lores, profesora en la Universidad de Harvard y conferencista en Cambridge, Berkeley y Moscú, ex ministra de educación y líder de los liberal-demócratas ingleses, "la cuestión no es si el Reino Unido puede soportar un pequeño impuesto a las transacciones en monedas, que sí podemos, sino cuál será el costo para el mundo si no lo hacemos". ■

# Segunda oportunidad para la guerra

Hernando Gómez Serrano

“Mientras no los metan a la cárcel, voten los proyectitos del gobierno”. Cínica, por decir lo menos, y con marcados visos de impunidad, es esta afirmación coloquial con la cual sorprendió al país meses atrás el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, al referirse a las primeras sentencias sobre los parlamentarios involucrados en la crisis de la “parapolítica”.

Mientras veintinueve parlamentarios se encuentran entre rejas y más de treinta han sido llamados a indagatoria, un número imposible de determinar cumple sus funciones en el Congreso en una especie de “libertad condicional”. Para ellos, su juez más inmediato e implacable es su propia conciencia... sí aún la tienen.

Ante esta preocupante realidad no se hizo esperar el espíritu santanderista de nuestros padres y madres de la patria, quienes con juicio y devoción se hicieron a la tarea –por demás legítima y encomiable– de establecer plenas garantías para los llamados a juicio por tan graves delitos. Porque es necesario decirlo con todas sus letras: utilizar formas violentas y extorsivas, amparados bajo la tutela y la acción de los grupos paramilitares, para garantizar un cupo en el Congreso, recibiendo de ellos dineros y oscuros favores, no es sólo un “escándalo político” –como retóricamente nos lo han querido presentar– sino sobre todo y ante todo un cúmulo de “delitos atroces” contra quienes han sido sus víctimas, así como un imperdonable crimen contra la democracia.

Pero los investigados y condenados no se han quedado quietos y han sido acompañados por sus colegas. Así la senadora Rodríguez de Castellanos ha promovido un debate en el recinto del Congreso para que especialistas y público en general presenten sus aportes y opiniones al Proyecto de Ley donde se incorpora como eje central la creación de la “segunda instancia” para los congresistas y altos funcionarios del Estado cuando son juzgados por las altas Cortes.

En el juicioso análisis de los procesos, pronto se encontró una

fisura jurídica, en el decir técnico, o quizás una esperanza de libertad para los ya condenados, y tal vez una garantía de impunidad para quienes todavía no han sido llamados a juicio, al determinar que debería garantizarse una “segunda instancia”. Fue así como, con diligencia, los estudiosos de la materia hallaron que, para garantizar el “debido proceso”, derecho inalienable de cualquier ciudadano ante la justicia, debía crearse una segunda instancia que revisara, dentro de los tiempos y procedimientos legales, las decisiones tomadas por la Corte y los Tribunales sobre los posibles delitos cometidos por altos dignatarios del Estado y congresistas.

Reiteramos que es sano para la democracia estar atentos a las posibles violaciones de Derecho que sobre cualquier ciudadano –sin importar su

condición o función social o política– se cometan. Por ello, el Proyecto de Ley, curiosamente llamado “Reforma Política”, que se circunscribe sustancialmente a la definición de la ya mencionada “segunda instancia”, puede parecer oportuno en el ánimo de mejorar nuestro sistema judicial pero deja grandes dudas sobre su legitimidad y su oportunidad política.

¿Por qué tanta urgencia en tramitar este proyecto mientras se aplaza indefinidamente la reforma estructural del sistema electoral colombiano, cuando ya se sabe que la parapolítica se refiere a prácticas delictivas en los comicios electorales, realizadas por congresistas secundados o testaferros de criminales paramilitares? Anotando, además, que no son ellos los únicos que cometen delitos electorales sino también aquellos que se apoyan en

agentes del contrabando, o quienes se legitiman y amparan tras cualquier otra forma armada legal o ilegal, o financian sus campañas con dineros públicos o practican cada vez más novedosas e imaginativas formas de compra de votos.

Todo ello es necesario corregirlo para fortalecer la democracia, pero mi pregunta, y creo que también de muchos otros, sigue siendo: ¿por qué en este momento? ¿Será que con esta necesaria acción legislativa el gobierno y sus áulicos en el Congreso quieren ocultar su preocupación por el esclarecimiento de la intromisión y participación consentida, en todos los niveles del Estado y la Administración, de la acción “para”? ¿O quizá ver tras las rejas a quienes ayer defendían sus proyectos o compartían sus propuestas políticas o comerciales y ya no? ¿O que el gobierno de Uribe, por extinción de materia, se está quedando sin los votos necesarios en el Congreso para aprobar sus “proyectitos”? ¿O que tal vez las cortinas de humo que confunden a la opinión pública con sucesos ampliamente difundidos se están desvaneciendo y los colombianos creemos cada vez menos en ellos? ¿O, finalmente, que los vientos que desde otras latitudes soplan a favor del esclarecimiento y sanción implacable de quienes cometen crímenes de Estado en el ejercicio de sus funciones gubernamentales les hacen prever que también pueden ser llamados a juicio por las Cortes Internacionales?

Porque los de a pie nos preguntamos: si se gasta tanto esfuerzo para buscar garantías en los juicios a los parapolíticos, ¿por qué no esforzarse por dar garantías a las víctimas de esos mismos criminales? Señores y señoras congresistas: el hambre no da tregua y, por tanto, no tiene segunda instancia. Nadie les dio una segunda oportunidad a los desplazados, a los secuestrados, a los desaparecidos y, mucho menos, a quienes habitan hoy las frías fosas comunes.

Señor Presidente: ¿por qué más bien no les da instrucciones a sus amigos parlamentarios para que le ayuden con una “segunda instancia” al Acuerdo Humanitario, una “segunda instancia” a la paz, una “segunda instancia” a la justicia social y, sobre todo, una “segunda instancia” a las víctimas de esta violencia incontrolada, para ver esclarecida la verdad, practicada la justicia y, con ellas, garantizada la reparación a los daños causados y todavía hoy mantenidos? Para que, como bien lo anota Gabriel García Márquez, podamos creer en la creación de “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir; donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la Tierra”. ■

**Establecimiento putrefacto.** Cada día se conocen nuevas detenciones de parlamentarios colombianos por su vínculo con los grupos paramilitares. Más de un cuarto del Congreso se ha visto afectado –más de cincuenta congresistas están siendo investigados y veintinueve se encuentran ya en la cárcel–, lo que tiene prácticamente paralizada la actividad legislativa.

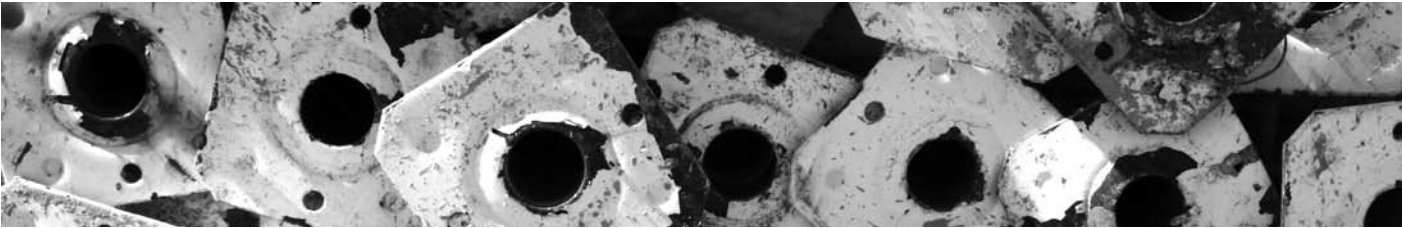
El escándalo ya supera al “Proceso 8.000”, de mediados de los noventa contra el presidente Ernesto Samper, acusado de recibir dinero del narcotráfico para su campaña electoral, en el que fueron condenados veintiséis congresistas.

Las confesiones de los involucrados revelan que las direcciones de varios partidos llegaron a acuerdos con los paramilitares o consintieron sus acciones a cambio de votos. La coalición de gobierno ha sido la más afectada, aunque individualmente el opositor Partido Liberal cuenta con el mayor número de congresistas investigados. Sólo el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta han quedado al margen de un escándalo que alcanza también a alcaldes, concejales, gobernadores, militares y empresarios.

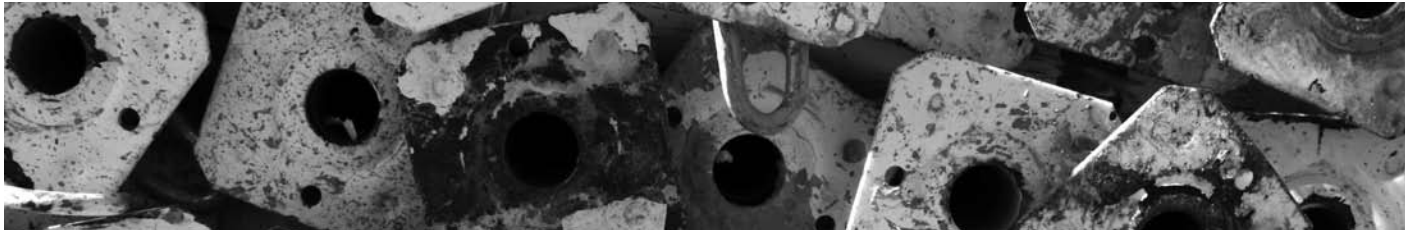
“¿Y cuáles son las cuatro patas que sostienen la curul (escaño)?”, se interroga en la revista *Semana* el influyente columnista Antonio Caballero. “Son la violencia y el miedo, el dinero y la co-

rrupción. De ahí vienen los votos. El alambique mágico de las urnas electorales a donde son llevados los votantes, arreados por la amenaza o comprados por unos pesos, transmuta en legitimidad la podredumbre. Sobre esas cuatro patas reposa todo el sistema”.

“Los medios de comunicación oficiosos responden a esta peste que se ‘come’ al establecimiento colombiano creando la sensación de que sólo ataca al Congreso”, dice un artículo que con el título “Establecimiento putrefacto” publicó en su última edición el mensual *Desde Abajo*. “Deforman la realidad. La enfermedad que ataca al postrado cuerpo nacional muestra desde años atrás innegables síntomas de que el infestado es todo el establecimiento, cuerpo que, conociendo los riesgos de la corrupción, de la violencia, de la apropiación con fines particulares de lo público, creó las condiciones para la generación y multiplicación del paramilitarismo. En cárceles como La Picota y otras, gozando de tratamiento especial por su poder político y económico, están en ‘vacaciones’, como de manera cínica aseguró el 8 de abril el senador Luis Humberto Builes Correa al momento de ser detenido. Y no es invención. Otras partes del mismo Estado, como el responsable de la policía política, gobernadores, alcaldes, concejales, generales y otros oficiales en uso de retiro, así como no pocos en ejercicio, están presos o en investigación por la misma causa”. ■



Este artículo se publicó en el mensual *Desde Abajo* de Bogotá, N° 133, 15 de abril-15 de mayo de 2008.



En una carta dirigida a la Representante de Comercio de Estados Unidos, Susan Schwab, veintisiete miembros del Congreso le pidieron que cumpliera el compromiso asumido en la Declaración de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2001 sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública y que prestara especial atención al tema del acceso a los medicamentos.

Entre los firmantes de la carta, enviada el 9 de abril en ocasión de la evaluación anual del Artículo Especial 301 del estado mundial de la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, se encuentran Henry A. Waxman (presidente del Comité de supervisión y reforma gubernamental y miembro del Comité de energía y comercio), John Lewis, Earl Blumenauer, Jim McDermott y Lloyd Doggett (del Comité de formas y vías), John Olver y Maurice D. Hinchey (del Comité presupuestario de la Cámara), y Jan Schakowsky (de los Comités sobre servicios de inteligencia y de energía y comercio).

La carta, que aborda las carencias del reciente Informe Estimado del Comercio Nacional Respecto de las Barreras Comerciales Extranjeras (conocido como NTE) de 2008 de la Representante de Comercio de Estados Unidos, expresa especial preocupación por el tratamiento que se da a Tailandia en el Informe 2007 de la Ley Especial 301, en el cual se lo incluyó en la Lista prioritaria de países en vigilancia poco después que emitiera tres licencias obligatorias.

En la determinación de si una medida de salud pública resulta preocupante por la protección “adecuada y efectiva” de los derechos de propiedad intelectual, la carta pide específicamente que no sólo se preste consideración a mejorar la innovación con una mayor protección de estos derechos sino que también se considere el compromiso de Estados Unidos de respetar medidas que

ESTADOS UNIDOS, SALUD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

# Congresistas piden cumplimiento de compromisos

Riaz K. Tayob

mejoren el acceso a medicamentos vitales en los países en desarrollo.

La carta exhorta a Schwab que en el informe de próxima aparición sobre la Ley Especial 301 reafirme el compromiso de Estados Unidos con la Declaración de Doha, y actúe en consecuencia. No debería citarse a los países por el uso de licencias obligatorias u otras flexibilidades establecidas de conformidad con las normas internacionales de comercio.

El Informe sobre la Ley Especial 301 discutió aspectos de la aplicación que hace Tailandia de los derechos de autor y reproducción, y otras leyes y licencias compensatorias. La carta dice que el Informe parece expresar preocupación ante la percepción de que cuando ese país emitió esas licencias había “falta de transparencia y debido proceso”. Es lamentable que la ambigüedad del lenguaje haya llevado a algunos a interpretar el Informe sobre la Ley Especial 301 como condenatorio de la emisión de licencias obligatorias, añadió.

Schwab sabe que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC permite el uso de licencias obligatorias pagando una remuneración adecuada a los titulares de patentes, dice la carta.

En la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública de 2001, Estados Unidos se comprometió a respetar el derecho de los miembros de la OMC a utilizar al máximo las

disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que ofrece “flexibilidades” que permiten proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos.

Los congresistas también expresan su preocupación porque el NTE “caracteriza erróneamente la autoridad de Tailandia para emitir licencias obligatorias”. Reconoce la autoridad para emitir licencias obligatorias por “emergencias de salud pública”, pero con sujeción a sus obligaciones nacionales e internacionales, afirman.

“De hecho, los ADPIC no limitan obligatoriamente la aplicación de las licencias a las emergencias, sino que permiten a los países decidir cuándo son necesarias”, dicen enfáticamente.

Tailandia ha sufrido la presión de la industria de medicamentos por emitir licencias obligatorias por motivos de salud pública. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea han reconocido que lo que ese país hizo estuvo dentro de sus derechos conforme a las normas de la OMC. Este argumento está apoyado también por un informe reciente sobre las licencias obligatorias tailandesas elaborado por organismos internacionales dirigidos por la Organización Mundial de la Salud, entre ellos la OMC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ■

Este artículo se publicó en South-North Development Monitor (SUNS), el 15 de abril de 2008.

**50° aniversario del BID en Colombia.** Al finalizar la Reunión Anual de Gobernadores del BID celebrada en Miami del 4 al 8 de abril, su presidente, Luis Alberto Moreno, anunció que la próxima se realizará en Medellín, Colombia. “Será una mirada hacia lo que ha sucedido en el BID y en la región en los últimos cincuenta años, y lo que vendrá en los próximos cincuenta”, afirmó.

Para las organizaciones sociales, el aniversario del BID también supone una necesaria evaluación de las actividades de la institución y del vínculo desarrollado con la sociedad civil. A lo largo de estos años han participado por un lado, como receptoras de cooperaciones técnicas o ejecutoras de los proyectos, a través de los Consejos Asesores

de la Sociedad Civil, impulsados desde la institución, y por otro, algunas organizaciones han trabajado a nivel nacional y regional realizando auditorías sociales a los proyectos, programas y políticas del BID en los diferentes países y de aquellas que apuntalan planes regionales de integración.

Con vistas a la reunión de Medellín, las organizaciones sociales sumarán esfuerzos para realizar una profunda evaluación de los impactos del BID en la región, así como también un análisis del proceso de realineamiento actualmente en marcha en la institución financiera.

Monitor de Instituciones Financieras Internacionales en América Latina: <http://ifis.choike.org/esp>

## SUNS

South-North Development Monitor

● **Incertidumbre sobre calendario de la OMC.** Funcionarios y diplomáticos que se encuentran en la capital de Ghana con motivo de la UNCTAD XII. Consideran difícil que el director general de la OMC, Pascal Lamy, pueda mantener el calendario previsto para finalizar las modalidades en agricultura y bienes industriales, debido a un retraso en los textos revisados por los presidentes de ambos grupos de negociación ocasionado por la labor adicional requerida sobre los productos sensibles y los productos tropicales. Se espera que los trabajos estén terminados el 5 de mayo, o incluso más tarde, en lugar de a fines de abril, como estaba previsto. (23/4/2008) ■

● **UNCTAD XII: la crisis de los alimentos.** La crisis alimentaria mundial fue un tema destacado en el inicio del 12° período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XII), que se celebra del 20 al 25 de abril en la capital de Ghana. Su secretario general, Supachai Panitchpakdi, instó a los países en desarrollo a ampliar su producción de alimentos.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, advirtió que la crisis alimentaria puede desencadenar otras crisis. El mundo ha consumido más alimentos de lo que produce y esto es insostenible, afirmó. Es necesario una inmediata acción humanitaria, pero en el largo plazo hay que aumentar la producción, dijo Ban, quien también pidió a las naciones más ricas a reconsiderar su vieja política de los subsidios agrícolas. “Si no podemos reducir los subsidios cuando los precios son altos, entonces cuándo vamos a hacerlo?”, se interrogó. (22/4/2008) ■

● **Sociedad civil pide adopción de medidas ante las crisis alimentaria y financiera.** En el Foro de la Sociedad Civil, que tuvo lugar en la capital de Ghana antes de la UNCTAD II, se subrayó la necesidad de que la UNCTAD adopte medidas para hacer frente a las crisis causadas por el fuerte aumento en los precios de los alimentos, las turbulencias financieras, los trastornos causados por los acuerdos comerciales y la falta de justicia económica.

Yao Graham, director de Third World Network (TWN)-África, la organización anfitriona del Foro, dijo que los altos precios de los productos básicos han limitado los beneficios para los africanos, sin embargo las empresas multinacionales se benefician enormemente. (22/4/2008) ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: <http://www.sunsonline.org>



Un informe en el que trabajaron cuatrocientos científicos, recurriendo a las pruebas y evaluaciones de miles de expertos de todo el mundo, exhorta a un cambio radical de la agricultura mundial como forma de resolver las crisis alimentarias y los aumentos de precios de los alimentos, que son causa de conflictos en numerosos países. Debe haber un cambio en la forma en que se producen los alimentos, basada en productos químicos, hacia métodos sustentables como la agricultura orgánica y también en el injusto sistema del comercio agrícola. Además, la ayuda debe concentrarse en los pequeños agricultores y no en los grandes propietarios.

Estas propuestas surgen de un informe de 2.500 páginas adoptado por más de cincuenta gobiernos y que se presentó a la prensa la semana pasada en numerosas capitales del mundo. Fue producido, después de un proceso de tres años, por la Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnología de Agricultura para el Desarrollo (IAASTD).

El proceso lo iniciaron algunos gobiernos y contó con el auspicio de organismos de las Naciones Unidas (FAO, PNUD, PNUMA, UNESCO y OMS) y el Banco Mundial.

A lo largo de tres años, el IAASTD realizó una evaluación del potencial del conocimiento, la ciencia y las técnicas agrícolas para reducir el hambre y la pobreza, mejorando los medios de vida rurales y trabajando por un desarrollo ambiental, social y económicamente sustentables. Apunta a impulsar la agenda agrícola para los próximos cincuenta años.

“Más de lo mismo no es una opción”, declaró Robert Watson, director de la IAASTD y científico del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Gran Bretaña, quien añadió que se había prestado escasa atención a los recursos naturales y la seguridad alimentaria.

“Continuar con las tendencias actuales profundizará aún más la división entre ricos y pobres”.

# El sistema agrícola debe ser revisado

Martin Khor

Watson cobró celebridad como primer presidente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. La metodología de trabajo de la IAASTD es similar.

Según una de las principales autoras del informe, la ambientalista malasia Lim Li Ching, investigadora de Third World Network (TWN), “ya no es viable el escenario en el cual continúe incambiada la agricultura industrial, que hace una utilización intensiva de los insumos y la energía, y ha marginado a los agricultores a pequeña escala”.

EL VIEJO PARADIGMA DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL, CON CONSUMO INTENSIVO DE ENERGÍA Y TÓXICA, ES UN CONCEPTO DEL PASADO.

La IAASTD concluyó que el pasado énfasis en la producción y los rendimientos proporcionó algunos beneficios, pero fue a costa del ambiente y la equidad social, comentó Lim. “Además, reconoce que la excesiva liberalización del comercio puede tener efectos negativos para la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el medio ambiente”.

El informe exhorta a los gobiernos y organismos a redirigir la inversión, el financiamiento, la investigación y el foco de las políticas a las necesidades de los pequeños agricultores. Es necesario poner más énfasis en la protección de

los recursos naturales y las prácticas agroecológicas, y aprovechar el conocimiento tradicional de los agricultores. Su principal mensaje es que la agricultura sustentable, basada en la diversidad biológica y que incluye a la agroecología y la agricultura orgánica, trae beneficios a los agricultores pobres y necesita ser apoyada por políticas públicas.

El Informe de Síntesis, acordado después de una reunión de una semana en Johannesburgo (Sudáfrica), se centra en ocho temas: bioenergía, biotecnología, cambio climático, salud humana, gestión de los recursos naturales, conocimiento tradicional, comercio y mercados, y la mujer en la agricultura.

Un aspecto importante del informe fue el relativo escepticismo hacia los cultivos modificados genéticamente. Después de analizar las evidencias, guarda significativo silencio sobre los beneficios reivindicados por los cultivos transgénicos, resaltando en cambio las dudas e incertidumbres que los rodean. “La breve respuesta a la pregunta de si los cultivos transgénicos pueden alimentar al mundo es ‘no’. Debemos comprender sus costos y beneficios”, dijo Watson en un documento. El informe dice: “La evaluación de la tecnología queda rezagada con respecto a su desarrollo, la información es anecdótica y contradictoria, y es inevitable que exista incertidumbre sobre los posibles beneficios y daños”.

También critica la premura por cambiar la utilización de la tierra de cultivos alimentarios a cultivos para agrocombustibles: “El cambio de los cultivos para su destino a combustible puede elevar los precios de los

alimentos y reducir nuestra capacidad de mitigar el hambre”.

“Este informe abre una nueva era para la agricultura”, sostiene una declaración de ocho organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Greenpeace, Amigos de la Tierra, TWN y Practical Action. “Ésta es una crónica del fracaso de la agricultura industrial que da que pensar. Refleja un creciente consenso entre científicos y gobiernos de que el viejo paradigma de la agricultura industrial, con consumo intensivo de energía y tóxica, es un concepto del pasado. Y los agricultores a pequeña escala y los métodos agroecológicos ofrecen el camino para impedir la actual crisis alimentaria”.

“La evidencia científica ofrece un apoyo inequívoco a la agricultura orgánica, como una solución creíble para el siglo XXI”, comentó Parva Mahale, de la Federación Internacional de los Movimientos Agrícolas Orgánicos.

Lim declaró que “este informe demuestra claramente que los agricultores a pequeña escala y el medio ambiente pierden con la liberalización del comercio. Los países en desarrollo deben ejercer su derecho a detener la inundación de productos baratos, subsidiados por el Norte”.

“Esto marca el inicio de una nueva y verdadera Revolución Verde”, expresó Benny Haerlin, de Greenpeace. “La forma moderna de la agricultura es biodiversa y hace una utilización intensiva de la mano de obra, y trabaja con la naturaleza, no en su contra”.

Patrick Mulvany, de Practical Action, añadió que “la IAASTD brinda la prueba de que el único camino posible es la intensificación de la agricultura biológica controlada localmente”.

Y Juan López, de Amigos de la Tierra Internacional, concluyó: “Es alentador ver que los científicos refutaron la propaganda habitual sobre los cultivos transgénicos. Se centraron en los problemas reales, y en sus soluciones los cultivos transgénicos no tuvieron gran cabida”. ■

Martin Khor es director de Third World Network (TWN).

## AGENDA GLOBAL

**Redactor responsable:** Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez.  
(c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur.  
www.item.org.uy / item@item.org.uy

